



Todo lo que quisiste saber
sobre la Lucha por la Vivienda
y no te atreviste a preguntar.

*Contra la legalización, el alquiler social y
el politiquero en los espacios okupados.*

Madrid, diciembre de 2014.

Las editoriales de Reformismo y okupación. Cómo okupar y no morir en el intento recibimos este texto el 19 de diciembre de 2014, diez días después de la primera presentación del libro. Tras corroborar la mayor parte de los datos que en él aparecen, se ha maquetado para su distribución. Se han añadido algunas notas a pie de página y corregido algunas faltas ortográficas.

La foto de la portada es una manifestación de la Asociación de Vecinos del Casco Viejo de Iruñea por la vivienda en 1978 (junto al omnipresente Nosferatu, símbolo de la okupación subversiva). La contraportada es parte de la fachada del CSOA La Gatonera en su primera localización, foto tomada hacia 2012.

Agradecimientos a la persona o personas que nos enviaron este texto, cuya identidad ni nosotros conocemos. Un fraternal saludo okupa.

Al igual que algunos centenares de personas, acudí en el último encuentro del libro anarquista de Madrid a la presentación del libro *Reformismo y okupación. Cómo okupar y no morir en el intento*. Tras escuchar sus intervenciones, indignarme con algunas de las respuestas que recibieron desde el público y leerme el libro, creo que hay cosas que tenían que haberse escrito en el libro y no están, otras que tenían que haber sido respondidas con mas furia, y algunos textos necesitan información que se nota que no tienen. Todo esto compartiendo totalmente las tesis principales del libro sobre la negociacion. Por eso he pensado en escribir este texto aclarando y matizando algunas cosas que las considero poco tratadas en el libro, y refutando algunos de los mitos que desde el ámbito (bien venido a llamar) reformista se están creando sobre la ocupación u okupación.

La lucha por la vivienda

Podemos encontrar esta lucha como prioritaria en el ámbito anarquista español desde al menos finales del siglo XIX. Diversos sindicatos anarquistas convocaban huelgas contra las subidas de los arriendos antes de la creación de la CNT. Durante la II República una huelga de alquileres apoyada por CNT puso en jaque a los propietarios y fue una de las primeras experiencias de okupación política, entrando algunos huelguistas desahuciados en varias viviendas vacías en barrios bajos de Barcelona y Madrid. El movimiento vecinal de los años setenta entra en bloques de viviendas vacíos para satisfacer las necesidades de sus vecinos en Terrassa, Zaragoza, Madrid... mientras CNT y el movimiento libertario toman edificios vacíos para satisfacer sus demandas de patrimonio histórico robado por el Franquismo, y los ponen en funcionamiento como

locales sindicales o ateneos libertarios. Algunos han llegado a nuestros días, En Euskadi florecen los Gaztetxes, mientras que a mediados de los ochenta jóvenes politizados de oscuro porvenir habitacional comienzan a okupar en todo el estado reivindicando por igual vivienda y locales donde hacer actividades. Este movimiento se acaba conociendo como movimiento okupa, y ha llegado a nuestros días. Sus denuncias de la mala situación en temas de vivienda, la subida de precios y la dificultad de acceder a hipotecas estuvieron presentes en muchos de sus proyectos.

Las acampadas y concentraciones de 2006 por una vivienda digna marcaron una nueva estrategia de lucha por la vivienda. Era una movilización que demandaba al estado que solucionara el problema. La represión que sufrió dio pie a que el movimiento siguiera años más tarde protestando por igual por el crecimiento de las dificultades de acceso a la vivienda como por la absolución de sus detenidos. La aparición de la crisis no pareció mejorar la situación de la vivienda, y en este contexto surge en 2009 la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en Barcelona, que no tarda en extenderse por el resto del territorio español. Tras la irrupción del 15-M en los movimientos sociales, la lucha por la vivienda vuelve al primer plano tras el interés que muestran muchas de sus asambleas de barrio por tratar este tema, constituir asambleas de vivienda y parar desahucios.

La presencia libertaria en 2006 y 2011 es indiscutible. En la PAH también ha habido y hay gente muy próxima a las ideas anarquistas o al menos cercana, o por lo menos de buena fe. Las asambleas de vivienda surgen mirando y analizando muy de cerca a la PAH, el referente en vivienda que existe ese momento en el estado. Muchas se desligarán pronto y recorrerán caminos distintos, y muchas otras empezarán un intenso romance con la Plataforma que llega hasta nuestros días. La polémica está servida.

PAH darles de comer a parte

Es absurda la admiración que desde ciertos sectores anarquistas se tiene a la PAH. El planteamiento de la PAH no es el de un movimiento social autónomo y autogestionado clásico, sino el de un grupo ciudadanista, legalista, pactista e intervenido de principio a fin por partidos políticos o personas afines a éstos. La PAH no hará la revolución ni pondrá sus cimientos, en cualquier caso la evitará reformando y maquillando un sistema capitalista que critica sin cuestionar sus bases principales. No cuestiona la propiedad privada, sino que la defiende y

apuntala, poniéndole adjetivos como “social” y hablando de “reparto equitativo de la riqueza” al estilo socialdemócrata¹.

La PAH se vale de cuatro estrategias para extender sus tentáculos: la detención de desahucios, la llamada “obra social” (ocupación de inmuebles), la dación en pago y la iniciativa legislativa popular. La PAH se ha adjudicado prácticamente todos los desahucios detenidos en España desde 2009, aunque en algunos no haya estado presente o fueran un grupo reducido frente a una inmensa cantidad de personas no pertenecientes ni alineadas con la PAH. Aunque alguna vez han sido minoría en un desahucio, se han visto con la legitimidad como para decirle a todo el mundo lo que tenía que hacer y evitar que alguna persona cuestionara su papel preguntándole a las personas desahuciadas si sabían qué se había negociado. En desahucios ni siquiera convocados por la PAH, se ha personado un grupo de ésta a dar órdenes y salir en los medios de comunicación como si fueran los responsables de la movilización.

El primer desahucio detenido en Madrid cuando aún el 15-M acampaba en Sol se lo adjudicó políticamente la PAH, pese a salido de la asamblea del barrio de Tetuán. Integrantes de la PAH, entre otros, salieron en defensa del secretario de IU Cayo Lara cuando una multitud enfurecida le gritaba que se fuera porque no querían dirigentes de partidos políticos en su barrio. Tras esto, se pospuso el desahucio para meses más tarde, tiempo en que la PAH logró atrase a los vecinos que iban a desahuciar. Les asignó su abogado, Rafael Mayoral, y cuando se preparaba una masiva movilización desde barrios y asambleas (algunas de ellas libertarias) para detener de nuevo este desahucio, Mayoral convenció a los residentes de que no protagonizaran movilización alguna, y la PAH negoció con el banco que les desahuciaba una dación en pago. La PAH vendió esta derrota de los movimientos sociales como una victoria arrancada al BBVA por la lucha en la calle.

A algún compañero la cúpula de la PAH madrileña le ha increpado por “anarquista” al intentar hablar con las familias desahuciadas o con las personas que habían acudido a parar un desahucio y mostrar sus críticas, o por usar cánticos anticapitalistas durante algunos desahucios. En una ocasión, casi todo el grueso que paraba un desahucio se le echó encima por intentar hablar con la afectada de todo esto. En Carabanchel, Madrid, un grupo acudió con una pancarta que incluía símbolos anarquistas, y se dedicó a cantar lemas consecuentes. Los miembros de la PAH allí

¹ Nota Editorial: Ada Colau, portavoz de la PAH catalana, declaró a la televisión catalana que se alegraba de que gracias a la PAH nadie hubiera acabado matando a su banquero o propietario. La PAH como colchón y lubricante social del descontento popular.

presentes se indignaron, pusieron caras largas, y aparecieron varias unidades de antidisturbios y políticas secretas que se dispusieron a identificar a los radicales tras la concentración.

La dación en pago es la cancelación por parte del banco de la deuda hipotecaria, quedándose en algunos casos con la casa los moradores o siendo realojados. En junio de 2010 el Observatori de Drets Econòmics, Socials i Culturals y la PAH catalanes propusieron en el Congreso la inclusión de la dación en pago en la ley, lo que fue rechazado por PP y PSOE por igual. Así que la PAH catalana inició su campaña por la Iniciativa Legislativa Popular, que tramitó para su inicio con la ayuda de entidades sindicales como UGT y CCOO y la institucionalizada Confederación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. Tras recoger miles y miles y miles de firmas, utilizando para ello bastantes de los recursos de los movimientos sociales (por ejemplo, la plaza de Tirso de Molina en Madrid) y vendiéndola como una parte importante de la lucha, se entregaron millón y medio de firmas al Congreso. El gobierno del PP anunció que convalidaría la iniciativa legislativa popular con la ley que estaba preparando, que no contemplaba casi nada de lo propuesto por la iniciativa, pero la PAH vendió al público la presentación de las firmas en el congreso y la toma de posición del gobierno como un triunfo de la lucha en la calle.

El PP, viéndose contra las cuerdas políticas pero tampoco aprisionado aprobó su Ley de Medidas para la Protección a los Deudores, Reestructuración de la Deuda y Alquiler Social, que fue más un lavado de cara que una solución de los problemas en la línea que proponía la PAH y algunos de los partidos que votaron contra esta ley, entre ellos PSOE e IU. La ley contemplaba una dación en pago en casos muy extremos, para familias repletas de hijos o con problemas sociales adicionales. Por lo demás, era una petición a los bancos que reestructuraran su economía para minimizar el número de desahucios en los necesarios, que siguen siendo muchísimos. Un ejemplo de cómo el estado usa recursos legales como éste para su beneficio.

El punto candente con el tema okupa es el de la Obra Social de la PAH. Un nombre descaradamente cogido de las obras sociales que hacen algunos bancos para lavarse la cara y orientar sus fondos negros a labores socialmente consideradas, como invertir en cultura. Una actitud tan asistencialista como la de la propia PAH, pues mientras que la “sociedad” no le pide al banco que invierta en arte, muchas familias realojadas no le piden a la PAH que mediaticen su proceso hasta el más mínimo detalle, pese a que sociedad y realojos callen porque obtienen beneficio de estas prácticas.

La política de la PAH consiste en realojar a las personas desahuciadas o sin casa mediante una okupación, a la que le quitan su subversiva “k” para aparecer como opción decente ante la inocente población con problemas habitacionales, y para eliminar a esta palabra su contenido anticapitalista y su tradición política principalmente contraria a la negociación con los propietarios. Un grupo técnico ocupa un edificio propiedad de un banco (nunca de un particular), se mete a las personas que han acudido a la PAH en busca de ayuda en el espacio y se negocia con el banco un alquiler social. Las personas realojadas no tienen prácticamente ni voz ni voto en este proceso, siendo informadas a cuentagotas por sus patrocinadores sociales.

Para esta estrategia han constituido las llamadas “corralas”, bloques de edificios de nueva construcción que han quedado vacíos con la crisis. La palabra “corrala” tiene reminiscencias históricas: fue una forma arquitectónica popularizada entre fines del siglo XIX e inicios del XX en la que una amplia comunidad de vecinos convivía de forma más fluida entre sus viviendas por la estructura del edificio. En estos casos, convivencia hay la justa: a los conflictos imaginables que surgen en las corralas por política o convivencia hay que sumar el papel autoritario que juega la PAH en sus negociaciones.

Hace un año y medio la Obra Social PAH presentaba su Manual de Ocupación. Pese a que hay quien diga que este manual es una mera propuesta de quehacer político, se ha echado de la PAH a grupos que funcionaban bajo sus siglas por no seguir su máxima: que la ocupación de inmuebles no es una forma de solución al problema de vivienda, sino un medio con el que ejercer presión a los bancos para conseguir alquileres sociales. Por eso dan todo el procedimiento que debe seguirse con detalles: la apertura a plena luz del día, ya que es legítimo ocupar para los fines de la PAH, y la colocación de una pancarta a la semana de la ocupación, ni antes para no alterar a los vecinos, ni después porque “tampoco conviene que pase demasiado tiempo, pues nos arriesgamos a invisibilizarlo, como tanta gente que accede a una vivienda por medio de «la patada»”. “La patada” es la forma que tiene la PAH de denominar a los okupas que no se someten a sus siglas, al estilo de los “okupas malos” frente a los “okupas buenos” de hace unos años. Para conseguir la negociación, se puede y se recomienda usar la prensa, el ayuntamiento, asociaciones de vecinos... pero reiterando que la ocupación es mera presión. Entre las propuestas de la PAH, hay otra bastante peligrosa: el empadronamiento de las personas realojadas en su nueva casa ilegal, con lo peligroso que eso puede ser ante un tribunal. Esto se puede presentar como una prueba de la “voluntad de permanencia” que registra el código penal en su delito de usurpación, y conseguir así una condena

penal. El peso de la ley irá contra estas personas, en vez de contra quienes escribieron el manual e incluyeron semejante ingenuidad.

Es innegable que la PAH no es una estructura superjerarquizada y definidísima, y que no todas las PAHs están de acuerdo en todo con todas las demás. Pero el perverso uso de la okupación para negociar con los bancos es común, como demuestra el conflicto que tuvo lugar entre las PAHs catalanas y la PAH de Girona, en concreto la del pueblo de Salt, donde la PAH okupó un bloque de viviendas y decidió no negociar con el banco, pues ya tenían casa, que es lo que deseaban. PAH Salt fue boicoteada por el resto de las regionales catalanas, se emitieron comunicados donde se victimizaba a las familias okupas, primeras en estar de acuerdo con esta decisión, mostrándolas como afectadas por una negligente cúpula dirigente de la PAH local, y se demandó que se abriera un proceso de negociación para efectuar realojos con alquiler social bajo las amenazas de expulsar a la PAH de Salt de la PAH Cataluña. Como el “Bloc Salt”, nombre del edificio en cuestión, no cambió su postura pese a las amenazas, fue expulsado de la PAH.

Tan polémico fue este hecho que la Generalitat tomó cartas sobre el asunto, ofreciendo ella misma pisos con alquileres bajos a las familias residentes. De 15 familias okupas, 8 permanecieron en el bloque pese a las amenazas de desalojo y la intervención de un gobierno catalán con miedo a que dinámicas de resistencia como esa se propagaran por Cataluña al margen de la PAH y las asambleas de vivienda afines. Más tarde los Mossos d’Esquadra desalojaban a las familias restantes.

El caso de Salt no ha sido único. En Carabanchel “La Charca”, edificio de nueva construcción okupado por una amplia diversidad de personas en el momento de mayor auge de la PAH, también sufrió intentos de intromisión de personas de la PAH o afines, que acudían a las asambleas proponiendo alquileres sociales, realojos y encasquetaban familias de su órbita en los pisos vacíos. La composición política de los residentes de la propia Charca impidió que el edificio fuera cooptado por la PAH. Sin embargo, la PAH logró que se contratara a su abogado Rafael Mayoral en su defensa inicial, depuesto más tarde por la asamblea del espacio y obligándoles al letrado a pagarle varios cientos de euros pese a no haber trabajado nada.

La dimensión política de la PAH no se queda en la vivienda. Desde el principio de los tiempos las pretensiones hacia la política formal han sido visibles. En Madrid, la PAH surgió y se movió muy controlada por Izquierda Unida: se reunía en sus locales, se llevaban a cabo asambleas paralelas previas a las asambleas generales junto a desahuciados y afines donde se decidía la línea política... El PCE ha liberado a algunos de

sus miembros para que participen activamente en la PAH madrileña. Feli Velázquez es un buen ejemplo: como secretaria de movimientos sociales del PCE recibe un sueldo y hasta un coche por su labor política en la PAH.

Otro caso es el de Chema Ruiz, el propio portavoz de la PAH madrileña, participe también en la Oficina de Vivienda de Madrid y portavoz en su momento de Democracia Real Ya. Chema Ruiz milita en el PCE de Alcalá de Henares, y fue dirigente de IU en la zona del Corredor del Henares. En la época en que PP e IU mantuvieron una política de pactos contra el PSOE (finales de los noventa) fue concejal de urbanismo en Torres de la Alameda, su pueblo natal. En los seis meses en los que ostentó este cargo, malversó fondos de todo tipo, utilizó dinero del erario público para crear empresas y montar un negocio inmobiliario. Cesó en su cargo porque se le pidió dimitir desde su partido por el mal uso que estaba dando, lo que propició que rompiera con IU y se pasara al PCE alcalaíno, que no pertenece a IU. Las empresas que constituyó quebraron, dejando a decenas y decenas de obreros en la calle que no cobraron todo lo que se les debía. Algunos prendieron fuego y destrozaron algunas de sus naves y apedrearon el chalet de tres pisos y jardín que Chema Ruiz se había adjudicado con toda esta corrupción. Con la llegada de la crisis inmobiliaria, su empresa especulativa fue a pique, y para sortear el temporal hipotecó su casa, que acabó perdiendo. Usó este dato, ocultando todos los anteriores, parecer hacerse un hueco predominante en la PAH, pero todo se acaba sabiendo.

En Murcia, José Coy, tradicional politicastro de Izquierda Unida, fue el primer portavoz de la PAH murciana. Dimitió de su cargo tras integrarse en el Consejo Federal de IU, sucediéndole Paco Morote, otro político profesional no directamente vinculado a ningún partido, pero presente en todos los conflictos de la región de los últimos años (los problemas con el agua, la llegada de la Alta Velocidad...) aportándoles buenas dosis de reformismo, calma y concordia.

El X Congreso de IU dejó claro que el partido "apuesta por integrar a los movimientos sociales en su estructura organizativa", reconociendo que "La Plataforma de Afectados por la Hipoteca [PAH], Democracia Real Ya –promotora del 15-M- e incluso las organizaciones de consumidores están repletas de militantes de IU que han visto más efectivo estos instrumentos que el que ofrece la propia organización a la que formalmente pertenecen". La PAH salió rápidamente a desmentir los rumores de un acuerdo oficial entre la PAH e IU. Un acuerdo entre ambos grupos no haría falta, todo funciona bien como ha ido hasta ahora. En un encuentro reciente de las PAHs del estado se acordó que cargos políticos no

podrían ostentar cargos en la PAH². Sin embargo, este punto lleva aprobado desde hace varios años, y esta dinámica ha venido sucediendo una y otra vez, mediante triquiñuelas o artimañas políticas, autodegradándose militantes de IU para acceder a cargos de responsabilidad en la PAH, o siendo destacados militantes de base de la PAH con altos cargos en IU. De hecho, entre los firmantes de la aportación de la X Asamblea de IU nos encontramos a José Coy y Paco Morote de Murcia, y a Manolo Colomer, Celes Navarro y Jeny Gonzalez de IU y PAH de Valencia.

En Sevilla la Corrala Utopía fue el referente de la PAH local. Las disputas internas, que en ocasiones llegaron a las manos, fueron uno de los principales impedimentos para que desde el espacio se negociaran alquileres sociales, así como la poca disposición de la propiedad. El desalojo de la corrala, con detenciones incluidas, fue el momento esperando por IU en Andalucía para ofrecer desde su consejería de Fomento a las familias en la calle alquileres sociales desde la Junta de Andalucía, lo que le valió tensiones internas con el PSOE, con quien comparten gobierno autonómico en coalición. La negociación conllevó que las ocho familias realojadas fueran retiradas de sus casas en cuanto se les cediera un papel que demostrara su exclusión social y pudieran ser realojadas bajo los cauces burocráticos adecuados. IU quedó como la salvadora frente a los impedimentos del PSOE y la mala voluntad de la policía sevillana y el PP que gobierna el municipio.

El ejemplo catalán es similar. Allí la preponderancia política no la lleva IU, un partido por otra parte bastante marginalizado y criticado por los movimientos sociales. Partidos políticos adscritos a los movimientos sociales como las independentistas Candidaturas de Unidad Popular o el nuevo Guanyem son el politiqueo de moda. Por una parte, la PAH de Barcelona ha sido el trampolín político de Ada Colau, activista radical en los años anteriores a co-fundar la PAH catalana y erigirse como su portavoz, su cara visible. Tras cinco años de conocerse su nombre y su cara, renuncia a su cargo en la PAH y anuncia que se presentará como alcaldesa de Barcelona en las siguientes elecciones, como candidata de Guanyem. Esta formación ha salido sobre todo de los movimientos sociales reformistas o reformistizantes barceloneses, y conlleva la

² Nota Editorial: según un número reciente del periódico del 15-M madrileño, la PAH se declara “apartidista”, si bien en el mismo congreso la PAH vallecas declaraba, siendo apoyada aparentemente por el resto, que los partidos políticos debían apoyar a la PAH y hacerse cargo de sus demandas. Un apartidismo entendido como apoyar a todos los partidos sin mostrarse de ninguno.

inclusión de éstos en la vía electoral, un gran triunfo para los bancos y las administraciones.

Por su parte, las CUP han regado, mimado y propiciado la vertiente supuestamente radical de la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis, con sus principales sucursales en los feudos independentistas de Sabadell y Manresa. Quim Arrufat, diputado de las CUP en el parlamento catalán fue uno de los encausados de la PAH por dos ocupaciones de inmuebles para negociar con las instituciones. Ver a las PAHCs haciendo sus actos en ateneos populares o casales independentistas vinculados a las CUP ha sido la tónica habitual. La irrupción de este grupo político ha sido nefasta en Cataluña, apagando parte de los movimientos sociales catalanes y vehiculando un discurso de tintes libertarios con el que acercarse a sectores de éstos más radicales y más vinculados al anarquismo. Su intento de mediar con las instituciones durante la revuelta por el desalojo de Can Vies y su papel en las PAHCs dejan visible su política en materia de vivienda.

El politiquero de la PAH no acaba aquí. Hemos podido ver sus siglas desfilar por centros sociales institucionalizados o con pretensiones a ello. La relación entre PAH Madrid y el Patio Maravillas han sido y son muy buenas. El Patio Maravillas es un centro social okupado que ha negociado varias veces con el ayuntamiento de Madrid la cesión del edificio, y del que han salido personajes políticos y recursos para las candidaturas de Podemos y Ganemos. Guillermo Zapata, uno de sus principales dirigentes, es el portavoz de Ganemos-Madrid. Sus asambleas colectivas junto a toda la gente afectada se hacen en el CS Seco, antigua okupa ya legalizada, que en sus últimos años se ha orientado hacia la política formal mediante el asociacionismo vecinal.

Que haya tanto trasiego de politiquero de izquierda por las diferentes PAHs no puede ser casual. Teniendo en cuenta la existencia de PAHs deslocalizadas en buena parte del territorio español, y la autonomía que tiene cada una, no cabe duda de que la etiqueta PAH se está usando para iniciar en carreras políticas a unas personas, asentar las carreras políticas iniciadas por otras y dar votos a partidos ya más que consolidados. La política asistencial de la PAH con los realojos concuerda perfectamente con el asistencialismo que todo aspirante a político intenta siempre propiciar, generando en las personas la necesidad de dirigentes como ellos a los que primero agradecerán su apoyo, y luego votarán y harán publicidad. Los realojados en Cataluña se cuentan ya por centenares, tras lograr la PAH que las familias de varias de sus corralas fueran realojadas en otros lugares con alquileres sociales. La vinculación de la PAH con ETA, las detenciones de algunos de sus dirigentes (como el propio

Chema Ruiz) y la aparición de sus siglas en la prensa oficial (hasta en la prensa del corazón se incluyeron pegatinas suyas) no es una casualidad: es publicidad que ha recibido y que la ha convertido en la interlocutora válida ante prensa, instituciones estatales y bancos, en detrimento de otros organismos más autónomos y revolucionarios.

Los casos de Chema Ruiz, Ada Colau y José Coy responden a una misma estrategia: siendo dirigentes de partidos o con vistas a ello, han tomado el cargo de mayor visibilidad de una PAH, la portavocía, para hacerse publicidad usando uno de los temas de actualidad más recurrentes como es el de vivienda. Tras consumirlo al ser elegidos con importantes cargos en un partido, Colau y Coy han abandonado la portavocía cuando ya era su nombre bien conocido entre el amplio espectro social que engloba la lucha por la vivienda en sus regiones. Que alguien diga como ocurrió en la presentación del libro que Ada Colau es simplemente la portavoz de la PAH y nada más, que no hay cargos ni jerarquías, es ingenuidad o mentir. Los portavoces siempre han llevado la voz cantante en los grupos cuando han tenido que acomodarse a estructuras “horizontales”. La PAH se ha constituido así. Ser portavoz es el viejo truco para pasar de una estructura menos vertical a una de partido, acabar en una lista electoral o con un cargo político en una administración.

Alquiler social: una contradicción en sí misma

Parece una broma de mal gusto que desde ámbitos contestatarios, radicales e incluso anarquistas se haya asumido este concepto como algo a lo que aspirar. Este hecho parece ser más fruto de un intento libertario de conseguir frutos políticos apoyando la lucha por la vivienda oficial que de una crítica real a ésta. Porque lo libertario siempre ha tenido como referente la okupación en su lucha contra la especulación inmobiliaria, pero ahora que el ciudadanía ha jugado sus cartas, hay quien ha optado por hacer entrismo en él.

Un alquiler jamás puede ser social. Este engaño lo populariza la PAH, y lo han asumido de manera casi acrítica oficinas de vivienda, asambleas de vivienda y, por supuesto, las familias instrumentalizadas hacia ese cauce. Muchas personas no saben que la frase de Proudhon “La propriété, c’est le vol!” quiere decir “¡La propiedad es **EL robo!**”, no “un robo” como se ha venido maltraduciendo. Algunas conocen su mala traducción, pero han optado por adecuarse a las circunstancias y dejarla apartada, pese a ser una de las máximas del anarquismo a nivel internacional. Antes de que personas despolitizadas confundan al grupo de anarquistas del barrio con las monjas del convento de la esquina, quizás sería preferible que esta frase se lleve a la práctica: el alquiler

social “es el robo” del movimiento en lucha por la vivienda, y que esto se esté vendiendo a personas que no tienen los recursos como para conocer otras realidades como lo máximo a lo que aspirar, es indignante. Que mientras tanto se esté apelando al derecho universal básico de tener una vivienda digna es irónico

Pagar un alquiler social implica tener un flujo de ingresos estables con el que afrontarlo. Esto lo tiene una cantidad limitada de personas, que cada vez es menor. Popularizar esta práctica a toda la población produciría unas dinámicas de exclusión social y la elevación de unas capas sociales, como toda solución socialdemócrata que no cuestiona el sistema. Nadie que esté inmerso en la lucha por la vivienda dirá jamás que su objetivo es generalizar el alquiler social, y asegurará que se respeta la okupación con k en mayor o menor medida. Pero la historia de la okupación en algunos países de Europa y el devenir de otras luchas como la sindical o la ecologista demuestran lo contrario: cuando un sector de una lucha se ofrece a negociar, el aparato estatal intenta introducir esa práctica en todo el ámbito con el que negocia, y despliega todo su potencial represivo contra el sector que se niega a negociar. Si el día de mañana la okupación pasa a pertenecer sólo a los libros de historia y miles de personas faltas de recursos que la usan para vivir pierden esta opción de vida, ya sabemos a quién agradeceréselo.

Porque el alquiler social encierra en sí mismo la exclusión de un gran número de personas: en las negociaciones con los bancos para conseguir alquileres sociales, los triunfos son más amargos que lo que suele vender la PAH o la asamblea de vivienda respectiva. Los bancos aceptan un acuerdo y se reservan la potestad de ofrecer alquileres sociales a quien consideren oportuno, estudiando cada caso individualmente. O el banco lo cede a la administración estatal, como ha ocurrido en varias ocasiones en Cataluña, donde la Generalitat ha recibido las competencias para los realojos, que ha llevado a cabo bajo sus criterios clasistas y exclusivistas.

El caso de la Manuela en Madrid muestra buena parte de esto. La asamblea de vivienda del centro ha vendido al exterior un triunfo al lograr que La Caixa se comprometiera a realojar a varias familias que okupaban un inmueble como forma de presión. La asamblea negoció por su cuenta y con ayuda de la PAH con La Caixa, contando a los habitantes del inmueble las negociaciones sin que éstos tuvieran opción a participar. Varias personas de las que entraron en primer lugar a vivir en el espacio eran poco deseadas para los objetivos de la asamblea, y fueron expulsadas del edificio bajo pretextos como consumir drogas e incluso un intento de violación. Durante y tras la negociación, fueron excluidas de recibir alquileres sociales las personas que no tenían recursos para pagarlos, como estudiantes o simplemente personas pobres. Se llegó a

dar fecha de expulsión a algunas personas que se negaban a abandonar el edificio, efectuando desalojos al estilo policial. El realojo benefició sólo a las familias a las que el banco había estudiado como pagadoras de un alquiler social, y la “victoria” apareció en la prensa oficial, en la del del 15-M y hasta en periódicos contrainformativos anarquistas como algo deseable, ocultando todos los daños colaterales que había ocasionado. La realidad es que la Caixa ha recuperado un edificio de veinte viviendas en el centro de Madrid y a cambio unas pocas familias dispersadas por la periferia le pagarán alquileres bajos en otros tantos pisos que tienen vacíos. Esto no es una victoria³.

El recurso a hablar de “familias” queda muy bien ante la prensa. Al fin y al cabo, la unidad familiar es lo que sigue bien visto por la sociedad. Nos han educado para formar una familia, y quien lo consigue está bien visto. Corresponde al ideal social consensuado. Genera más empatía entre la población que aparezcan padres o madres de familias con hijos siendo desahuciadas o recibiendo alquileres sociales, o niños pequeños huyendo junto a sus padres de un desalojo o un desahucio entre policías llevando sus juguetes consigo. Imágenes desgarradoras por sí mismas, y a las que puede sacárseles rédito político. A quien no le gusta ver eso en la tele o el periódico y quiere hacer algo, puede recurrir a los organismos de lucha por la vivienda que salen dando su opinión o mostrando sus símbolos en la misma noticia.

Pero esta exaltación de la familia como la principal víctima de la especulación inmobiliaria invisibiliza otras realidades que no se adecúan a ésta. Personas pobres sin recursos de ningún tipo que intentan sobrevivir luchando a su modo contra la especulación, personas que no tienen hijos o no viven en pareja, inmigrantes o gitanos... La gran lucha oficial por la vivienda no ha pensado en esta gente ni para “integrarla en el sistema” ni para visibilizar sus problemas, salvo en casos contados. En ocasiones se ha priorizado alojar a familias antes que a personas individuales sin casa. Afortunadamente, muchas de estas personas tampoco necesitan a nadie que les salve.

La familia a la que se pretende salvar tiene la capacidad de pagar un alquiler social. Tampoco todas las familias van incluidas en el lote de apoyos políticos. Hay quien ha acudido a la PAH porque iba a perder su casa al no poder pagar el alquiler, y hasta fecha muy reciente se le ha negado toda cobertura por dedicarse sólo a hipotecas, algo que también quedaba muy bien ante la sociedad. Quizás hacer presión por un alquiler social en este caso hubiera salvado a algunas de estas personas

³ En la misma semana en que llegó este texto a nuestros correos, la Asamblea de Vivienda Centro se transformaba públicamente en PAH Centro.

dispuestas a pagar un alquiler a quedarse en la calle, como terminó ocurriendo en muchas ocasiones.

Pero, además, el alquiler social cuando se concede a quienes cumplen los requisitos, también tiene una cantidad de limitaciones y problemas abismales. La PAH define como “alquiler social “aquel que no supere el 30 % de los ingresos mensuales de un núcleo familiar”. Esta generalización no puede ser beneficiosa para todo el mundo. Si un padre de familia, sustentador de una numerosa prole (tres o cuatro hijos) y de su cónyuge, cobra el salario mínimo interprofesional (actualmente en unos 650), tiene que dar al banco unos 200 € al mes. Viviendo de forma “normal”, 450 € al mes no son suficientes para comer, pagar el transporte público, los materiales del colegio o el instituto para los niños, vestimenta... y, por supuesto, la luz, el agua, el gas y el mantenimiento de la vivienda. Y esto sin contar que hoy en día quien gana el salario mínimo es afortunado, porque con la proliferación de la precariedad laboral cada vez hay más salarios mucho más bajos.

Si este empleo se pierde, algo probable tal y como está actualmente el mercado laboral, la petición de alquiler social incluye la permisión de mensualidades no pagadas si las personas se encuentran en una repentina situación de desempleo. ¿De verdad va a cumplir esto una entidad bancaria? Por último, los alquileres sociales que se están dando no son vitalicios, sino que tienen fecha de caducidad, normalmente entre dos y cinco años. Cuando vayan caducando los primeros, ¿habrá que volver a okupar un inmueble y hacer presión al banco? Una de las críticas que desde la lucha de la vivienda se hace a la okupación es la falta de estabilidad. Sin embargo, el alquiler social tampoco parece haber mejorado mucho más este punto: un gran número de viviendas okupadas supera los cinco años con moderada facilidad.

La lucha por la vivienda en los barrios

Tras la llegada de las acampadas del 15-M a los barrios, en buena parte de éstos se constituyeron asambleas de vivienda en las ciudades más grandes con pretensiones de realojar a los vecinos sin casa. El referente de bastantes de éstas es o inicialmente fue la PAH. Desencuentros entre algunas asambleas de vivienda y la PAH han supuesto algunas rupturas, mientras que otras asambleas siguen vinculadas a la PAH e imitando todos los procedimientos que usa para su lucha por la vivienda. En Madrid existen organismos de coordinación entre las asambleas de vivienda entre ellas y entre las asambleas, la oficina de vivienda y PAH Madrid, que también tiene cierta coordinación con otras PAHs de la región.

La labor positiva de muchas de estas asambleas de vivienda es innegable. La ayuda que han ofrecido para okupar a diversidad de gente que se ha visto en la calle con la crisis es digna de mención y respeto. En buena medida han acercado la okupación a la sociedad. Pero no están exentas de críticas por ello. En la mayoría de asambleas de vivienda lo que prima es el asistencialismo. El asistencialismo consiste en hacer por las personas labores no solicitadas, o solicitadas pero hacer todo por ellas. Muchas veces se confunde la asistencia (sinónimo de ayuda) con el asistencialismo. Un ejemplo de asistencia son las oficinas de okupación, en ocasiones conectadas de algún modo con las de vivienda. Una persona o grupo de personas van a la oficina y se les ofrecen diversos recursos para okupar (direcciones, material, cobertura legal, incluso presencia personal), pero partiendo siempre de que quien tiene que abrir la casa y hacer las permanencias y defenderla en sus primeros días son las personas que quieren okupar. En muchas asambleas de vivienda se abre la casa a las personas que quieren una solución y no les ha quedado otro remedio que okupar, o se ofrece la llave de una ya abierta, y se mantiene el contacto. Las asambleas de vivienda han contribuido a la proliferación de la okupación en los barrios, lo que está muy bien, pero han generado relaciones de dependencia entre los okupas y los miembros de las asambleas que podían haberse evitado usando otras vías.

Sin embargo, un punto positivo es que normalmente no se le impone a las personas que han acudido la negociación de alquileres sociales o cesión del inmueble como condición única para recibir la ayuda, lo cual muestra su integridad como personas. Las relaciones de dependencia entre personas en riesgo de exclusión social y los movimientos sociales generan un decir sí a todo lo que diga quien te ha dado casa. Lo que importa es tener una vivienda hoy y mañana, luego ya veremos. Es sintomático la indignación que en muchas familias realojadas ha supuesto la publicación del libro *Reformismo y okupación*. No sólo no se muerde la mano de quien te da de comer, sino que además se defiende. Se puede repartir propaganda contra la iglesia católica en una fila de reparto de comida frente a una parroquia, y se verán resultados similares sin que por ello la institución eclesiástica sea menos criticable. De hecho, algunas asambleas de vivienda como la de centro en Madrid también usan las palabras “obra social” para sus acciones de realojo.

Algunas de las personas realojadas o utilizadas por las asambleas de vivienda son a veces quienes más tienen que callar. Algunas han utilizado los grupos de vivienda para acceder a un inmueble en el que robar y mafiosear a sus vecinos, lo que ha supuesto grandes problemas a los grupos de vivienda. Ellos tampoco son los responsables de esto, pero tampoco han establecido en la mayoría de los casos protocolos para evitar la entrada de estas personas y expulsar a las conflictivas, sino que

se improvisa. Algunas familias realojadas acudieron a la asamblea de vivienda asegurando no tener dinero para pagar una casa, pero más tarde se les ha descubierto propiedades en otras localidades, o no tenían ningún problema en gastarse centenares de euros en televisiones de plasma, frigoríficos de última generación, un coche nuevo o en llevar a sus hijos a colegios de pago de precios desorbitados. Tras perder su vivienda mediante un desalojo, han recurrido a las personas que les habían alojado en su nueva casa para que volviera a solucionarles su problema de estar en la calle, en vez de autoorganizarse ellas mismas para okupar otro espacio o haber tejido un paracaídas social con otras personas para cuando llegaran las vacas flacas. Se les ha visto impasibles y atolondrados a la espera de lo que vendría después, sin ser dueños de sus vidas. Si la iniciativa no ha venido de las personas que las alojaron, no han vuelto a okupar.

En muchas ocasiones se infantiliza a las personas que solicitan acceder a una vivienda okupada. Las personas saben lo que quieren en la mayoría de los casos. Muchas veces les puede el miedo a la pobreza y la falta de recursos, y eso les convierte en vulnerables. Escudarse en que hay que negociar un alquiler social o hacerle la okupación entera a una familia porque tiene hijos, es demasiado mayor, padece alguna enfermedad física o mental o es minusválida no soluciona nada, sólo aumenta la sensación en estas personas de que no pueden valerse por sí mismas ni para adquirir una vivienda ni para negociar por sí mismas ni para opinar que no quieren negociar, sino que prefieren quedarse como están.

Este pensamiento parte de unos prejuicios no verbalizados sobre la okupación. Se considera la okupación como inestable, marginal, sucia, sometida a acoso policial perpetuo, repleta de desalojos y procesos penales, que conlleva una vida llena de precariedades y luchas con el medio. La realidad elimina estos prejuicios: algunas viviendas okupadas duran lustros y hasta décadas, muchas pasan años sin recibir una sola visita policial o de la propiedad, otras se encuentran en perfectas condiciones estructurales y de higiene, y muchísimas gozan de reconocimiento entre el vecindario. Los desalojos no siempre acaban en juicio, y los juicios suelen ganarse. Los que se pierden, no suelen conllevar cárcel.

La okupación se vende a veces dulcificada a estas personas que intentan acceder a viviendas okupadas. En otras, se ve como una alternativa inviable. Familias con sus hijos viven en casas okupadas sin pretensión alguna de negociar. Ancianos de más de setenta años y personas con certificados de minusvalía viven okupando. Quizás da miedo a algunos grupos de vivienda contarles las penalidades por las que con cierta probabilidad pueden pasar por la okupación: cambio de

domicilio con frecuencia, acoso policial y de la propiedad, chapuzas para obtener luz y agua o imposibilidad de éstas... pero quien no asuma que le ha tocado ser pobre en un sistema que ensalza la propiedad y la riqueza, y que desde su pobreza le va a tocar sufrir ya sea trabajando o subviviendo, tiene un problema de clasismo interiorizado que muchos grupos de vivienda no sólo no están solucionando, sino que alimentan. Cabe reiterar una vez más que no todas las asambleas de vivienda caen en estas dinámicas.

Conviene dejar de vernos como los salvadores de la sociedad por una vez y criticar nuestro propio trabajo. Palabras como apoyo mutuo, autoorganización, autogestión y demás lemas libertarios no siempre tienen por qué ser usadas de forma deseable. De hecho, pueden ser recuperadas por el capitalismo en emprendedoras empresas o subgrupos de multinacionales. Etiquetar algunas dinámicas que se crean en la lucha por la vivienda de esta forma es autoengañarse y engañar a un sector de lo libertario suspicaz con lo que está ocurriendo. En algunos lugares se están llevando a cabo dinámicas que, sin necesidad de cuestionar el sistema, están produciendo una auténtica autoorganización de la población contra la carestía de la vida. Los bancos de alimentos protagonizados por las propias personas afectadas son un buen ejemplo de ello. O las propias acciones en la lucha por la vivienda contra bancos decididas y protagonizadas por las personas damnificadas, ya sea buscando alquiler social o parando venideros desalojos.

Si desaparecieran las asambleas de vivienda, ¿cuántas personas de las que llevan ya meses okupando podrían seguir usando esta vía por sí mismas? Si desapareciera la PAH, ¿cuántas de las familias realojadas se autoorganizarían para pedir por sí mismas el siguiente alquiler social al caducarles el actual? Probablemente un número muy reducido o nadie. En cambio, si desaparecieran las oficinas de okupación, muchas okupas seguirían haciendo esa labor de asesoramiento informalmente, y tras un desalojo se abriría en poco tiempo otra casa, con o sin ayuda de algunas personas de la red social que todo okupa teje para su propia supervivencia. En el barrio de Tetuán, en Madrid, el banco de alimentos ha sufrido represión institucional y acoso policial, y ha seguido rehaciéndose gracias a que las riendas del mismo las tienen las personas que se benefician de él, no un grupo técnico profesionalizado.

Quizás deberíamos pensar seriamente y sin tomar estos comentarios como ofensas o insultos qué diferencias hay entre algunas de las labores que hacemos como anticapitalistas y las que hacen ONGs vinculadas a la democracia cristiana, Cáritas, el Estado o los repartos de comida de España 2000 y el centro social neonazi. En Italia grupos nazis vinculados a la Casa Pound se han dedicado en los últimos años a ocupar viviendas

para italianos abriéndoles la casa y entrando dentro. Y más recientemente también han abierto casas a inmigrantes europeos, para demostrar que su raza latina es superior a la incapacidad racial que rumanos, búlgaros o serbios tienen para gestionar sus propias vidas, que necesitan las de los herederos del Imperio Romano. En Valencia, la red clientelar que ha montado España 2000 va más allá de los comedores sólo para españoles: han pagado deudas hipotecarias y alquileres a algunas familias españolas que acudieron a su sede, que ahora son algunos de sus seguidores más activos.

El asistencialismo es una deformación de la asistencia, del apoyo mutuo y de la autonomía, y en cualquier ámbito que aspire a un cambio revolucionario libre de jerarquías tiene que desterrarse.

Futuro incierto

Si hace cuatro o cinco años hubiera aparecido un libro criticando a la PAH y a los centros sociales legalizados o proclives a la negociación con un contenido similar al que tiene *Reformismo y okupación*, prácticamente nadie perteneciente al ámbito anarquista se hubiera alterado lo más mínimo como ha ocurrido en esta última edición del Encuentro del Libro Anarquista. Algo ha cambiado en los últimos años. La lucha por la vivienda es un movimiento social que ha superado la alternativa libertaria tradicional en vivienda, y diversos compañeros, con toda la buena intención del mundo y aportando su esencial punto de vista se han involucrado en él, ya sea en la PAH, ya sea en grupos de vivienda más horizontales. En muchas ocasiones han conseguido grandes logros: quitar protagonismo a los partidos políticos, jugar en su terreno comiéndoles la calle, fomentar prácticas de autoorganización y autogestión en sectores de la población que jamás habrían acudido a la okupa de punkis de al lado o al centro social del barrio por tener prejuicios por su estética. Muchas asambleas de vivienda han conseguido grandes logros, y en otras se han conquistado parcelas de poder significativas. Pero a nivel general, la valoración no se muestra positiva. Es entendible que esta afirmación hiera la sensibilidad de quienes se están dejando la piel en esta lucha, pero es la opinión que compartimos muchas personas que también luchamos por la vivienda, pero desde otra parte de la barricada.

Tomarse a lo personal estas críticas no lleva a ninguna parte. La okupación también tiene sus críticas, y se van afrontando sin generar dramas ni antagonismos irresolubles. Nadie cuestiona el buen hacer dentro de ciertas estructuras de compañeros y compañeras libertarias, pero si alguien considera que esas estructuras no son la solución, no tiene por qué callarse su opinión, como nadie se calla las opiniones en infinidad de temas. También hay quien se toma la exaltación de la okupación a lo

personal porque vive alquilando, con hipoteca o con una casa en propiedad. La forma de vida de cada uno es una elección que sólo corresponde a cada persona, y el que gente de una misma lucha viva okupando no minusvalora en nada a quien viva sin okupar. Del mismo modo tiene que entenderse que si alguien que okupa ve su opción de vida peligrar por los objetivos políticos de otras personas, sean o no compañeras de lucha, actuará en consecuencia.

Una de las grandes derrotas que está sufriendo la okupación es que se está mostrando a la población como algo descafeinado y en donde todo vale, sin crítica de ningún tipo. Nadie tiene el patrimonio sobre la okupación, ni quien okupa sin negociar ni quien sí lo hace y lo llama "ocupar". Y precisamente por eso la okupación u ocupación o liberación o como quiera llamarse no debería ser utilizada para fines que pueden conllevar su destrucción, y mucho menos si además hay partidos políticos detrás que buscan lo de siempre, afianzarse ellos y salvar el capitalismo.

Una de las peores labores teóricas que se están llevando en esta línea la protagoniza la Oficina de Vivienda de Madrid, que se muestra como uno de los referentes de la ciudad para llegar a la población en materia de vivienda. Dejando claro que la oficina ve la ocupación (con c) como herramienta de lucha contra el Capital, se muestra partidaria de usar la ocupación como presión para modificar las leyes ("Penalizar la especulación, despenalizar la ocupación", leemos en su web), obtener alquileres sociales, daciones en pago y peticiones al estado que regule la usura bancaria y le de salidas sociales. En el apartado de materiales electrónicos sobre "Ocupación" de su web nos encontramos el Manual de Ocupación de la PAH y algunos textos partidarios de la negociación de los centros sociales con las instituciones.

La otra gran derrota es el uso por los partidos políticos. Aunque se tengan bien claras las ideas antiautoritarias, en muchas ocasiones es difícil que tu lucha no sea recuperada por los partidos de izquierda si ésta goza de apoyo social. Trabajar bajo ciertas siglas o palabras clave da beneficios ante los medios de comunicación y publicidad hacia las personas necesitadas de vivienda, pero también implica lidiar contra partidos políticos deseosos de sacar beneficios políticos. A lo largo de este año hemos podido escuchar cómo Podemos prometía despenalizar la okupación. Otros partidos se han subido al mismo carro, entre ellos Izquierda Unida, partido que apoyó con sus escaños en el Parlamento al PSOE cuando aprobó el actual código penal que la penalizaba. Muchos militantes, antiautoritarios o no, en la lucha por la vivienda plantan y plantarán cara a ambas formaciones durante las elecciones que habrá en 2015, conscientes del peligro que corre su lucha si es absorbida por

formaciones políticas, pero tantos otros, antiautoritarios de palabra y corazón, se verán seducidos por las promesas y la verborrea de algunos de los grupos nuevos y será la lucha por la vivienda la correa de transmisión que usen estos partidos para captarlos, como ya ha ocurrido en Cataluña con las CUP.

Se avecinan tiempos donde un sector de la lucha radical va a probar la alternativa institucional y probablemente se afiance en ella, mientras otro sector afilará sus postulados en discurso y práctica y seguirá luchando contra la propiedad privada y la especulación inmobiliaria del mismo modo que ha venido haciendo hasta ahora. En este sector residirá la responsabilidad de seguir ofreciendo una alternativa real a la población mediante la okupación, difundir sus prácticas autoorganizativas y hacer real el lema “un desalojo, otra okupación”. Queda claro que el número de desalojos está aumentando y aumentará con toda probabilidad. Y para ello es necesario conocer contra quién nos enfrentamos de frente y quién nos viene por la espalda, para lo que espero haber ayudado con este texto.

Rata de ciudad. Un barrio periférico cualquiera de Madrid, diciembre de 2014.

